

Estudio Comunitario (Revisado el 28/6/17)

*Familias Unidas por Justicia*, es un grupo de miembros de *Somos Un Pueblo Unido* que consta de 50 familias inmigrantes en Farmington, Nuevo México, “Familias” lleva luchando cinco años para mitigar los efectos negativos de las políticas y prácticas de la policía local, los funcionarios de la cárcel y de la corte y los agentes de libertad condicional en la ejecución de las leyes federales de inmigración con los agentes de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

“Familias” trabaja con *Sexual Assault Services* y con *Engaging Latinos for Communities for Education* (ENLACE) para acabar o limitar la colaboración entre las agencias policiales locales y ICE y cómo esto podría afectar la seguridad económica, la salud y el bienestar de los trabajadores inmigrantes y sus hijos en Nuevo México.

San Juan es uno de los pocos condados que no tiene frontera con México y que colaboran cercanamente con ICE, agencia cuya constante presencia afecta enormemente las decisiones educativas, financieras y de salud que los inmigrantes y sus familias tienen que hacer cotidianamente. Mientras que muchas jurisdicciones locales han promulgado proactivamente una serie de políticas de “ciudades santuario” que limitan la cooperación con ICE para hacer cumplir las leyes federales de inmigración, en el condado de San Juan, la oficina del sheriff, la prisión y los tribunales municipales y magistrales han dado la bienvenida a ICE y hasta han desviado fondos locales y otros recursos (cubiertos con nuestros impuestos) para hacer su trabajo.

Las condiciones (determinantes de salud) que pudimos identificar como resultado de estas políticas son:

- La falta de seguridad económica a corto y largo plazo
- El precario sentido de seguridad de las familias (incluida la seguridad pública)
- El difícil acceso a los servicios de salud y a otros servicios críticos para las familias inmigrantes

La colaboración de las fuerzas policíacas locales con ICE puede mutar como resultado de la orden ejecutiva del presidente Trump expedida el 25 de enero. Esta orden amenaza con retirar la financiación a los gobiernos locales que ejercen su derecho constitucional de determinar cómo usar sus recursos en la aplicación de la ley federal. Dicha orden busca también avergonzar públicamente, intimidar a los gobiernos locales que deciden que cooperar con los federales no es una acción que beneficie a la comunidad. Los agentes de inmigración quieren ayuda para identificar y deportar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo y a familias trabajadoras de inmigrantes de nuestra comunidad.

Aunque la orden ejecutiva del presidente Trump esté siendo impugnada en un tribunal federal y aunque haya una orden de restricción temporal para impedir su implementación inmediata, el gobierno federal todavía está tratando de quitar los recursos que el Departamento de Justicia otorga a los gobiernos que no cooperen con ICE y no tracionen a sus residentes indocumentados. También se están implementando otras estrategias para identificar y detener a las familias de inmigrantes, incluyendo logrando una mayor colaboración con los oficiales de libertad condicional (P.O. por sus siglas en inglés de “parole officer”) y con burócratas en los tribunales. Mientras tanto, el gobierno del presidente Trump está buscando fondos para agregar otros 1,000 agentes de ICE, los miembros del Congreso están amenazando con hacerle grandes cambios a las leyes federales de inmigración, y algunos estados están intentando aprobar leyes que intentan forzar a las autoridades locales a cooperar con ICE.

Este estudio ayudará a los líderes locales y estatales a entender mejor los preocupantes niveles de impacto que estas medidas tienen en el bienestar de toda la comunidad.